Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Sección Primera (Reparto)
E. S. D.

DEIZY TORRES ROMERO, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado civilmente con la cédula de ciudadanía No. 53.007.756 de Bogotá, actuando en nombre propio y en mi calidad de ciudadana, me permito manifestar que por medio del presente escrito, en ejercicio del artículo 88 de la Constitución Política y artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, instauo demanda en ejercicio de la Acción Popular regulada por la Ley 472 de 1998, en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, entidad de derecho público domiciliada en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por la Ministra Dra. CLAUDIA BLUM DE BARBERI, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, o por quien en el momento de notificación del auto admisorio de la demanda haga sus veces, con el fin de que sean protegidos los siguientes derechos e intereses constitucionales colectivos de Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; al derecho a la asistencia consular, a la a la dignidad humana; a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, el de los menores de edad viajantes, inmigrantes, consumidores de los servicios de los traductores.

I. DERECHOS O INTERÉS COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS

Estimo que por parte de la demandada se están vulnerando o amenazando los derechos e intereses colectivos relativos a¹:

DERECHO DEL CONSUMIDOR A OBTENER EL SERVICIO DE UN INTÉRPRETE O TRADUCTOR OFICIAL

Un traductor oficial es un profesional certificado para realizar la traducción de documentos de acuerdo a ciertos lineamientos existentes internacionalmente; y para cumplir con esta actividad, realiza estudios del idioma en universidades y obtiene las certificaciones de idoneidad necesarias para prestar sus servicios como traductor oficial luego de examen en cualquiera de las dos Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, departamento de Lenguas extranjeras, o la Universidad de Antioquia- en la Escuela de Idiomas; así como la licencia de traductor e intérprete oficial de la lengua extranjera al español y viceversa.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia expide Resolución, por el cual, reconoce a la persona como traductor oficial e intérprete juramentado, siendo la profesión de traductor reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ente que entregaba un registro de inscripción como traductor oficial y se validaba cada uno de los trabajos o traducciones que realice. Conforme esto, el traductor certificado acudía a la embajada o consulado correspondiente a inscribirse en sus listados, donde era considerado para ofrecer sus servicios en caso de ser requeridos.

Este proceso garantizaba que los servicios prestados por el Traductor o Intérprete Oficial estuvieran plenamente certificados y reconocidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de embajadas y consulados, avalando con esto calidad y un buen trabajo.

Con la expedición de la Resolución No. *10547 del 14 de diciembre 2018, por la que derogó la Resolución 3269 del 14 de junio de 2016*, la entidad demandada eliminó el

¹ La Corte Constitucional ha reiterado que la lista establecida en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998 es meramente enunciativa, no taxativa, en virtud del artículo 88 de la Constitución Política Colombiana, por lo que se pueden perseguir y proteger a través de la acción popular los derechos de las personas y de los bienes jurídicos, en procura de uno de los fines públicos y básicos del Estado Social de Derecho.

directorio de traductores oficiales de la página de internet de la entidad, vulnerando así los derechos e intereses colectivos de los consumidores que necesitan el servicio de Traductores e Intérpretes Oficiales; entre otros ejemplos se tiene, que en las Notarías se realiza una traducción de la página de Google, las cuales son traducciones literales e incoherentes.

El servicio que prestaba la Cancillería de contener un listado en su página web de los traductores, no es contraria a la Convención de la Haya sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros de 1961, especialmente, cuando las autoridades migratorias tienen la obligación de proporcionar un intérprete o traductor, en caso que las personas inmigrantes no hablen o entiendan el idioma español.

Aunado a lo expuesto, la eliminación de esta lista no obedece a costos para la administración, puesto que no generaba gastos de salarios, prestaciones sociales ni de honorarios, específicamente cuando los traductores no eran dependientes de la Cancillería ni sus empleados o trabajadores, ni exigían de esa entidad contraprestación económica; pese a esto, y como consecuencia de tal eliminación se está trasgrediendo conexamente el derecho al trabajo y la actividad económica consagrados en los artículos 24, 25 y 333 de la Constitución Política.

DERECHOS A LOS MIGRANTES; A LOS MENORES INMIGRANTES, DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL DEBIDO PROCESO Y A NO SER INCOMUNICADO

El derecho internacional reconoce el derecho de todo el mundo a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio país. Igualmente, en ejercicio de su soberanía, los Estados, retienen la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales, incluidos aquellos en situación irregular, la cual se encuentra sujeta a obligaciones en materia de derechos humanos y a cualquier acuerdo o convenio que puedan haber suscrito para limitar su soberanía en este ámbito; el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable no sólo a los nacionales de un Estado, sino a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus regular, irregular, documentado o indocumentado. Sus derechos humanos no están aislados de los derechos de otros y, con la excepción del derecho a entrar en otro país y de votar y presentarse a unas elecciones para un cargo público, los migrantes disfrutan de los mismos derechos humanos y laborales que los nacionales.

El Estado Colombiano en desarrollo del derecho inmigratorio, expidió el Decreto No. 0834 de 24 de abril de 2013, el cual regula requisitos y trámites para el ingreso, permanencia, salida voluntaria, deportación o expulsión, cancelación visa y permisos; resultado de las normas internacionales, existe el compromiso de ingreso y salida segura y digna de los inmigrantes deportados; y para promover sus derechos y protegerlos, resulta necesario, que en el caso que no sean hispanoparlantes, se les asista a través de traductores y/o intérpretes oficiales, lo cual reporta como obligación de las autoridades migratorias.

En Colombia, todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e Internacionales, un traductor, con buen manejo del lenguaje, especialmente en las traducciones de tipo legal, puesto que estas deben ser de alta calidad y sobre todo confiables.

Asimismo, cuando las autoridades detengan a una persona extranjera, esta autoridad tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitirle recibir la visita

del personal consular, tal derecho debe garantizarse; puesto que la condición de migrante no le resta valor a ningún ser humano, por tanto, está prohibido dar un trato diferenciado y excluyente a éste grupo de población. Su paso y estadía por el Estado Colombiano no debería significar un riesgo de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad.

Por lo que bajo ninguna circunstancia, se les puede incomunicar, especialmente en el curso de un trámite administrativo o judicial, en defensa de sus derechos.

Lo anterior, aplica especialmente cuando **se trata de menores** que necesitan salir del país, o cuando provienen de otro país, así como la traducción de los respectivos permisos

II. HECHOS, ACTOS, ACCIONES U OMISIONES

1. El Estado Colombiano, creó el cargo de *“Interpretes Oficiales”*, con la expedición del Decreto 382 del 19 de febrero de 1951; emitiéndose de forma posterior, esto es para el año 1991, como requisito la presentación de un examen de aptitud como traductor e intérprete que determina la oficialidad del servicio prestado por el Ministerio de Justicia.

2. Bajo la anterior normatividad y para el año de 1991, se estableció la presentación de un examen de aptitud como traductor e interprete que determinaba la oficialidad del servicio prestado por parte del Ministerio de Justicia.

3. En la actualidad, el servicio de Traductor e Intérprete Oficial debe ser acreditado ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, mediante la realización de pruebas y/o exámenes únicamente ante la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de Antioquia, entidades que determinan la aprobación o no de la prueba para posteriormente emitir la correspondiente licencia que permita desempeñarse como Traductor Oficial.

4. Desde el 1º de julio de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló como única forma de efectuar los trámites de apostillar documentos a través de su plataforma web, por lo cual ahí se encontraba las listas de traductores e intérpretes oficiales junto con sus datos de contacto, para que cualquier ciudadano consultara tal registro, teniendo certeza de quién(es) tienen la idoneidad para desempeñar esa actividad.

5. De la calidad e idoneidad de los traductores e intérpretes oficiales, este servicio es requerido en los diversos escenarios administrativos o judiciales, públicos o privados, y así mismo, solicitado por los migrantes y personas que desean salir del país con sus hijos menores de edad, necesitando para tal caso, tramitar los documentos necesarios, para lo cual se debía consultar la lista de contacto de los traductores que se encontraba en la página web, medida que generaba confianza, además de ser un medio expedito para contratar su actividad.

6. La función de traductor e intérprete oficial, es importante para los diversos trámites que establece la Cancillería de Colombia, y de las personas –en nuestro país así como en el exterior, que necesitan del servicio de autenticación y firma de un traductor, siendo importante, la lista de los contactos que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página oficial.

7. La Viceministra de Relaciones Exteriores, expidió la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre 2018, por la que derogó la Resolución 3269 del 14 de junio de 2016 eliminando el directorio de traductores oficiales de la página de internet de la entidad, vulnerando así los derechos e intereses colectivos de los consumidores que necesitan el servicio de Traductores e Intérpretes Oficiales, y que son citados en esta demanda.

8. Cabe resaltar que con la eliminación de la lista de traductores e intérpretes oficiales de la página web de la Cancillería, no obedece al cumplimiento de la Convención de la Haya de 1961 incorporada a nuestro ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 455 de 1998, puesto que en esta norma se prevé únicamente la eliminación de trámites para la legalización de documentos, -eliminación de trabas y presunciones de autenticidad de los documentos públicos extranjeros a ser exhibidos en los países miembros de la Convención.

9. Sin embargo, en ningún artículo de la norma en cita, se establece la eliminación de las traducciones e interpretaciones oficiales, es más, si se observa el texto de la ley 455 de 1998, cuando se transcribe la Convención esta debió ser traducida al español, a través de traducción oficial No. 058; así pues, se recalca que la traducción y la interpretación oficial es necesaria tanto en el ámbito público y privado, por lo que no es válido ningún razonamiento de la eliminación de este servicio necesario.

10. El servicio que fue eliminado sin justificación o razonamiento valedero por la entidad accionada, el cual por demás daba la confiabilidad de ser prestado por personas capacitadas y acreditadas para el servicio de traducción cumpliendo los estándares exigidos, tal fin, lo que además no generaba gastos como honorarios o salarios para la entidad accionada; y que con el nuevo requisito generado como consecuencia de la expedición de la Resolución No. 10547, este genera trámites, además de incrementar costos, puesto que exige la inscripción de firma de los traductores ante diferentes Notarías de nuestro país.

11. Con la medida de eliminación de la lista de traductores e intérpretes oficiales, se imposibilita el acceso a traductores certificados, confiables, de forma rápida y segura, con interpretaciones fieles al documento en idioma diferente; especialmente cuando hoy por hoy, resultado de esta eliminación, las Notarías están prestando el servicio, pero a través de una traducción directamente del traductor de Google y otras aplicaciones de fácil acceso, pero las cuales dan como resultado una traducción deficiente, literal y por ende incoherente; lo que al momento de legalizar dicho documento, es devuelto por tal razón, a modo de ejemplo, me permito aportar prueba la declaración extrajudicial 031 de la Notaría 80 del Circulo de Bogotá de 18 de enero de 2020, por el cual la ciudadana Luisa Fernanda Sanpedro Castillo domiciliada en Pereira, manifiesta que ante la Notaría 4 de Pereira presentó documentos para apostillar y ser presentados ante la Embajada Italiana en Bogotá, donde le ofrecieron el servicio de traductor certificado, no obstante, la Embajada, le indicaron que no es lengua italiana, que se hizo bajo traductor automático, por lo que perdió la cita en la Embajada y no pudo legalizar la documentación.

12. La eliminación de esta lista no obedece a costos para la administración, puesto que **no** generaba gastos como salarios, prestaciones sociales ni de honorarios, específicamente, cuando los traductores e intérpretes oficiales no eran dependientes de la Cancillería, ni ostentaban la calidad de empleados o trabajadores; así como tampoco exigían de esa entidad contraprestación económica alguna; pese a esto, y como consecuencia de tal eliminación, además de los derechos de los consumidores del servicio, se está trasgrediendo conexamente el derecho al trabajo y la actividad económica de los traductores e intérpretes oficiales, derechos consagrados en los artículos 24, 25 y 333 de la Constitución Política.

13. De otra parte, el derecho internacional, especialmente, lo referente a los derechos humanos, establece que este es aplicable en los Estados, tanto a los nacionales, así como a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado, incluidos los inmigrantes, independientemente de su estatus regular, irregular, documentado o indocumentado; derechos que no están aislados, y que nuestro país, en desarrollo de esta normativa, expidió el Decreto No. 0834 de 24 de abril de 2013, que regula requisitos y trámites para el ingreso, permanencia, salida voluntaria, deportación o expulsión, cancelación visa y permisos, entre otros.

14. Resultado de lo anterior, está vigente el compromiso de ingreso y salida segura y digna de los inmigrantes deportados; y para promover sus derechos y protegerlos, resulta necesario, que en el caso que no sean hispanoparlantes, se les asista a través de traductores y/o intérpretes oficiales, lo cual reporta como obligación de las autoridades migratorias; y esto debe ser garantizado en cualquier proceso administrativo o judicial.

15. Asimismo, de acuerdo con los lineamientos legales internacionales y constitucionales, si un extranjero es retenido, se le debe facilitar la comunicación, y esto es posible cuando en tratándose de personas diferentes a los hispanoparlantes, con un traductor o intérprete oficial, con el objeto de no vulnerar ningún derecho a su condición humana.

16. Lo anterior, aplica especialmente cuando se trata de menores que necesitan salir del territorio nacional, o cuando provienen de otro país, para la traducción de los respectivos permisos, no obstante, y como se mencionó en los hechos precedentes, se ha visto limitado gracias a la eliminación de la lista de traductores e intérpretes oficiales, realizada por la accionada, como consecuencia de la expedición del acto administrativo Resolución No. 10547 del 14 de diciembre 2018, afectando con ello los derechos colectivos de quienes se beneficiaban de esa labor, e incluso de los traductores e intérpretes oficiales; por lo que se presenta esta acción constitucional en busca del amparo de los mismos, y como mecanismo de prevención por daño eventual o contingente.

III. PRETENSIONES

Sírvase Honorable Magistrado realizar las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se declare que la entidad Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores, ha vulnerado y amenazado los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos nacionales y extranjeros y a los menores de edad, usuarios del servicio de traductores e intérpretes oficiales, los derechos e intereses colectivos relativos al Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; al derecho a la asistencia consular, a la dignidad humana; a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, el de los menores de edad viajantes, inmigrantes que no hablan castellano, consumidores de los servicios de los traductores, como consecuencia de la eliminación de la lista de traductores e Intérpretes oficiales que se encontraba en la plataforma web de la Entidad, datos de contacto necesarios cuando se requiere de trámites de migración, de salida del país de menores de edad, o apostillar y/o legalizar un documento, como consecuencia de la expedición de la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre 2018.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ampare a los ciudadanos nacionales y extranjeros y a los menores de edad, usuarios del servicio de traductores e intérpretes oficiales, de los derechos e intereses colectivos relativos al Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; al derecho a la asistencia consular, a la dignidad humana; a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, el de los menores de edad viajantes, inmigrantes, vulnerados y amenazados por la entidad demandada como consecuencia de la eliminación de la lista de traductores e Intérpretes oficiales debido a la expedición de la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre 2018.

3. Solicito con el mayor respeto, se ordene la adopción de las medidas y trámites administrativos necesarios para garantizar los derechos colectivos afectados con el acto administrativo que causa la amenaza, vulneración o el agravio de tales derechos e intereses colectivos, y evitar el daño contingente, y/o se haga cesar el peligro que amenaza los derechos e intereses colectivos de los consumidores del servicio de traductores e intérpretes oficiales.

4. Ordenar a la accionada que cese todo hecho, acto que vulnere los derechos colectivos mencionados anteriormente, y por ende restablezca la lista de traductores e intérpretes oficiales.
5. Que se dé un plazo perentorio a la accionada de 15 días para iniciar todos los trámites y acciones tendientes a expedir los actos administrativos con el fin de restablecer el servicio y la lista de los traductores e intérpretes oficiales.
6. Se integre un comité para la verificación del cumplimiento de la Sentencia, en el cual participará; La Personería Distrital de Bogotá, el Defensor del Pueblo, o sus respectivas delegados y la Accionante. El Comité rendirá informe sobre sugestión con destino a este expediente.
7. Que se condene en costas a la demandada.
8. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo normado en los artículos 192 del C. P. A. C. A.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho las siguientes normas:

- Constitución Política, artículos 13, 20, 24, 25, 29, 44, 24, 25 y 333.
- Ley 472 de 1998, artículo 4º, que establece que los derechos colectivos no es un listado taxativo; y por su parte el literal n) del artículo 4º de la citada ley.
- Decreto No. 0834 de 24 de abril de 2013

V- PRUEBAS

1) Documentales: Aporto con este libelo los siguientes documentos:

- Copia simple de la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 2018 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, por incurrir en varios de los vicios de nulidad que se señalan en esta demanda.
- Derecho de Petición de 9 de mayo de 2019 presentado por la suscrita, con el cual se agotó el requisito de procedibilidad para incoar la acción popular.
- Respuesta oficio No. S-OAJI-19-022636 de 21 de mayo de 2019, expedido por la Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería.
- Declaración extrajuicio 031 de la Notaría 80 del Circulo de Bogotá de 18 de enero de 2020, por el cual la ciudadana Luisa Fernanda Sanpedro Castillo.
- Certificado de existencia y representación legal de la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales, Nit 901354850-1

2) Testimonial: Solicito al Honorable Magistrado, se sirva citar a declarar a las siguientes personas:

1. CARLOS JULIO CARRERO CONTRERAS, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., representante legal de la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales, para que bajo la gravedad de juramento declare sobre los hechos que constituyen esta acción popular, Nos. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la presente demanda y responda el interrogatorio que en su debida oportunidad formularé, quien puede ser localizado en la calle 75 No. 23-08 oficina 101 del Bogotá D.C.

2. MARÍA LUISA DEL PILAR MOLANO VÁSQUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., representante legal suplente de la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales, para que bajo la gravedad de juramento declare sobre los hechos que constituyen esta acción popular, Nos. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la presente demanda y responda el interrogatorio que en su debida oportunidad formularé, quien puede ser localizada en la calle 75 No. 23-08 oficina 101 del Bogotá D.C.

AMPARO DE POBREZA

Habida cuenta de la necesidad de demandar judicialmente el amparo de los derechos e intereses colectivos señalados en el presente escrito de demanda, comedidamente solicito a su Despacho, se sirva concederme el beneficio de amparo de pobreza consagrado en los artículos 19 de la ley 472 de 1998, y 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, por no encontrarme en capacidad para sufragar los costos que conlleva un proceso como el que se inicia con la presente demanda de acción popular.

La anterior manifestación la hago bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de este escrito.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

De conformidad con el numeral 4º artículo 161 y 144 del CPACA, presenté derecho de petición ante la entidad convocada como requisito previo, para que ejerciera la protección de los derechos e intereses colectivos violados, de los cuales se invoca amparo vía judicial, a través de radicado No. E-CGC-19-021554 de 9 de mayo de 2019, de reincorporación del listado de traductores e intérpretes; la cual fue respondida a través de oficio No. S-OAJI-19-022636 de 21 de mayo de 2019 por la Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, indicando que el servicio fue solo informativo y que no ha vulnerado o transgredido los derechos e intereses colectivos.

PROCEDIMIENTO

Corresponde el procedimiento especial señalado en la ley 472 de 1998.

COMPETENCIA

Conforme a los artículos 15 y 16 de la ley 472 de 1998 corresponde al H. Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conocer en primera instancia de este proceso por ser el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES una entidad de derecho público, y por ser la ciudad de Bogotá D.C. su lugar de domicilio.

ANEXOS

- 1- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- 2- Copias de la demanda y de sus anexos para el traslado a la accionadas, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- 3- Copia de la demanda sin anexos para archivo del Tribunal.
- 4- CD con la demanda en archivo PDF.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la Carrera 15 No. 31-50 apartamento 1307 de Bogotá, D.C., Teléfono de contacto: 3178532620, Correo electrónico: deizytorresr@gmail.com

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la Calle 10 No. 5-51 de Bogotá D.C. Teléfonos Nos. 3814000, fax: 3814747; correo electrónico: judicial@cancilleria.gov.co

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la carrera 7 No. 75-66 pisos 2 y 3 Centro empresarial C75 de Bogotá D.C., Teléfono No. 2558955, fax: 2558933. Correo electrónico: conciliaextrajudicial@defensajuridica.gov.co.

Del Señor Magistrado, atentamente,

DEIZY TORRES ROMERO
C.C. No. 53.007.756 de Bogotá